

Con 67 años a cuestas, Luis Ángel Castañeda sigue trabajando las minas. Su piel ennegrecida revela los muchos años que ha tenido que faenar de sol a sol, escarbando las montañas o los ríos, buscando el oro que le permita vivir con un poco de dignidad.

“Si no trabajamos nos morimos de hambre, por viejo que esté uno no se puede poner a descansar”, dice. A su lado, otro numeroso grupo de mineros de Tarazá, Bajo Cauca se prepara para una marcha de protesta, la cual se realizó ayer pasadas las 3:30 de la tarde sobre la Troncal a la Costa.

“Mi oficio es de baharequero, pero ya ni eso se puede hacer”, se lamenta el hombre, quien de la noche a la mañana pasó de ser minero informal a ser llamado “delincuente”, según los mineros, por la aplicación del decreto 2235, que declaró ilegal la minería informal y dio licencia para confiscar y destruir las maquinarias utilizadas para la labor.

No obstante, con el decreto, el Gobierno pretende poner orden en la actividad minera, pues en no pocos casos es sustento de grupos armados al margen de la ley.

John Edward Álvarez, uno de los organizadores de la marcha minera, explica que ante la tragedia que está viviendo Tarazá no queda más que protestar. “Acá, si no hay minería no hay economía. De esto viven el comerciante, el transportador, el mototaxista, el hotelero, el campesino, toda la región”, asegura.

Desde el lunes el pueblo congrega a mineros y campesinos de Tarazá y Cáceres, de los corregimientos Jardín, El Doce, El Guaimaro y demás, afectados por las normas con las que el gobierno pretende organizar la minería en el país.

Por eso, el paro minero seguirá, porque la situación para quienes han pasado su vida sobreviviendo en esta actividad, ahora es insostenible, dice Álvarez

El comandante de la Policía de Cauca, coronel Luis Muñoz, quien hace presencia en Tarazá, sobre la parálisis del miércoles comentó que “el comercio está cerrado, pero es que los mismos comerciantes, en un consejo de seguridad que se hizo el lunes, dijeron que iban a cerrar tres días en señal de apoyo a los marchantes”.

En el área se reforzó el pie de fuerza, decisión que se mantendrá mientras duren las

protestas, que abarcan los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste. Caucasia, sin movimiento

En contraste, ayer en Caucasia se vivió un ambiente de normalidad y los manifestantes se mantenían a la expectativa de un posible acuerdo con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, quien debe llegar hoy a Medellín para dialogar con los voceros de los mineros agrupados en Conalminercol.

“Ella dice que va a arreglar es con los baharequeros, pero con ellos no hay nada qué arreglar, el problema es con la pequeña y mediana minería que es la que está frenada con la persecución del Gobierno”, advierte Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

No tiene muchas expectativas, pues recalca que ya van tres acuerdos con el Gobierno para cambiar el decreto que terminó “criminalizando” la actividad minera informal y “ninguno se ha cumplido”.

Pero no se rinde. Espera, como los mineros a los que representa, que en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, queden incluidas las normas que despenalicen su actividad y puedan seguir trabajando en la explotación minera.

<http://www.elcolombiano.com/antioquia/acuerdo-pone-a-calcular-a-mineros-LB1333409>